PRESENTACIÓN

Balance sobre la libertad de expresión en Costa Rica

Giselle Boza Solano*

Introducción

En el año 2021, Costa Rica ocupó el quinto lugar del mundo en libertad de prensa, solo superado por los países nórdicos: Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. En el 2020 había ocupado la séptima casilla. Esta posición del país destaca en el medio de un deterioro generalizado de las libertades informativas en América Latina¹.

Según la organización internacional Reporteros sin Fronteras (2021), en el continente, los periodistas prosiguen con su trabajo de información en un entorno cada vez más dañino y tóxico. La desconfianza hacia la prensa se alimenta de la retórica anti mediática de la clase política latinoamericana, cuya agresividad va creciendo.

En Costa Rica, las elecciones de 2022 mostraron un escenario de mayor ataque a los medios de comunicación, tanto en redes sociales como en el discurso de algunos dirigentes políticos, mientras persiste la deuda en materia de equidad para acceder a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos.

El país prosigue por la ruta del fortalecimiento de la jurisprudencia constitucional para garantizar el derecho de acceso a la información pública, especialmente en el contexto de la pandemia, aunque aparecen nuevos desafíos para

1 Ver Clasificación Mundial 2021 en <https://www.rsf-es.org/clasificacion-mundial-2021-tabla-de-paises/>

la libertad de expresión en el entorno digital y para el ejercicio del derecho a la protesta social.

Esta presentación del Informe recoge las principales tendencias sobre libertad de expresión en el país, durante los años 2020, 2021 y en el proceso de elecciones nacionales, a partir de un registro de acontecimientos relevantes, reportes e informes sobre el país, así como las iniciativas legislativas y la jurisprudencia constitucional y electoral. Asimismo, ofrece una perspectiva general sobre los capítulos que componen esta tercera entrega.

Avances y retrocesos en el contexto de la pandemia

Según la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, en su Informe sobre Internet, “Libertad de Expresión y Espacio Cívico en América Latina” (mayo, 2021), en el contexto de la pandemia, Costa Rica es el único país de la región, entre los consultados, que no registra restricciones al derecho a la libertad de expresión e información². En el primer Infor-

2 Ver Informe <http://www.alianzaregional.net/articulo-xiii-internet-libertad-de-expresion-y-espacio-civico-en-america-latina/> Ver adicionalmente el Estudio Regional sobre el Acceso a la Información en el contexto de la emergencia sanitaria. <http://www.alianzaregional.net/estudio-regional-acceso-a-la-informacion-en-contexto-de-emergencia-sanitaria/> Segundo Estudio Regional sobre Acceso la Información en el contexto de la

*Periodista y Abogada. Tiene una Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y cursa el Doctorado en Derecho de la misma universidad. Profesora de Derecho de la Comunicación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), investigadora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la UCR.

me de la misma organización sobre Acceso a la Información (mayo 2020), Costa Rica se ubica entre los países en los que las organizaciones consideran que la calidad de la información que se publica, en relación a COVID, es alta.

En el mismo sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Rele), en su Informe Anual 2020, sección Costa Rica, celebra la tutela del derecho de acceso a la información pública por parte de la Sala Constitucional, en el contexto de la pandemia, ante los diversos recursos de amparo interpuestos por medios de comunicación para acceder a la información sobre la crisis sanitaria y anota eso sí, con preocupación, la declaración del Presidente Alvarado que acusó a la prensa de “usarlo” para hablar de cosas “insulsas” frente a la crítica de los periodistas sobre el reducido acceso para consultarle.

Uno de los votos relevantes de la Sala Constitucional se refiere al recurso de amparo interpuesto por periodistas de las Radios de la Universidad de Costa Rica por la negativa del Ministerio de Salud de entregar la base de datos despersonalizada, con información desagregada, sobre los pacientes confirmados con COVID-19. La Institución alegó que no era posible, por la misma emergencia, brindar información tratada de manera diferente, ya que los recursos estaban destinados prioritariamente a atender la situación.

El Tribunal Constitucional concluye que esta no es justificación para que un ente público niegue el acceso a la información pública:

...partiendo de que la escasez de recursos materiales o humanos no es una justificante válida para sacrificar un derecho fundamental, que la base de datos general

a la cual los promoventes fueron referidos no les es de ninguna utilidad, y de la duda razonable que queda este Tribunal sobre la verdadera imposibilidad de facilitar la información tal y como fue pedida; en aplicación de los principios pro homine y pro libertate, esta Sala Constitucional debe intervenir para salvaguardar el derecho de los tutelados de acceso a la información en relación con la libertad de prensa. Debe quedar claro que la información solicitada debe ser facilitada, garantizando la exclusión de cualquier dato sensible e información que pueda dar lugar a la identificación o localización, directa o indirecta, de las personas diagnosticadas con el coronavirus COVID – 19 (Sala Constitucional, Resolución No. 14292-2020, considerando VII).

Preocupación sobre las restricciones a la protesta social

En el mismo informe, la Rele expresa su preocupación por los alcances de la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos³, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 9808 y que entró en vigencia el 06 de febrero de 2020. Esta normativa prohíbe las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono, lo que a todas luces significa un retroceso en el derecho a la protesta social.

Sobre este tema la Relatoría recuerda que:

La protesta social, que incluye los derechos de reunión pacífica y sin armas, asociación y libertad de expresión, es una herramienta fundamental en la defensa de

emergencia sanitaria. <http://www.alianzaregional.net/segunda-edicion-del-estudio-regional-acceso-a-la-informacion-en-contexto-de-emergencia-sanitaria/>

3 Ver Informe Anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2020.pdf>

la democracia y de los derechos humanos. En este sentido, la CIDH ha considerado que “el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización”. Por ende, los requisitos jurídicos que sientan una base para que una reunión o manifestación sea prohibida o limitada no son compatibles con el derecho de reunión ni con el ejercicio de la libertad de expresión en el Sistema Interamericano (Rele, 2020, párr. 451).

Desinformación, ataques a la prensa y falta de equidad en la contienda electoral.

El Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la primera y segunda ronda electoral de las elecciones 2022, advirtió al país, nuevamente, acerca de los desafíos en materia de equidad en la contienda.

Son reiterativos los informes de la misiones electorales en Costa Rica al señalar que el sistema de financiamiento actual no favorece la equidad de la contienda electoral. “Los datos provistos a MOE/OEA indican que solo 5 de las 25 candidaturas presidenciales que participaron en la elección realizaron más del 75% del total de gastos en publicidad registrados durante la campaña”.

La Misión propone al país, una vez más, “discutir la creación de una franja electoral gratuita en medios de comunicación, que garantice un espacio a todas las candidaturas y que contribuya a reducir los costos de las campañas”.

Desde el año 2013, el Tribunal Supremo de Elecciones formuló una propuesta de reforma electoral para establecer franjas electorales gratuitas en radio y televisión, con el fin de generar una mayor equidad en la contienda, un

abaratamiento de las campañas electorales y una reducción significativa de los gastos partidarios en radio y televisión.

Actualmente, se encuentra en corriente legislativa otra iniciativa para la creación de franjas electorales (expediente No. 21836) que propone: a. Un adelanto de la contribución estatal para que el Tribunal Supremo de Elecciones adquiera espacios publicitarios y los distribuya entre los partidos políticos y b. un mecanismo de distribución de la publicidad, entre los partidos políticos nacionales y provinciales, en el que se combina el arrastre electoral, la representación legislativa y un criterio de asignación equitativa, lo que garantizaría un mayor conocimiento de las personas electoras de la oferta partidaria. Ese mecanismo de asignación de la publicidad le daría posibilidad a todas las agrupaciones políticas y a las personas candidatas de plantear sus propuestas y participar de manera más activa en el debate democrático.

La Misión expresó, asimismo, su preocupación por la crítica constante a la prensa y al trabajo de personas comunicadoras, expresadas por el candidato presidencial, hoy Presidente, Rodrigo Chaves Robles, alegando una cobertura parcializada de la campaña con intención de perjudicarlo.

La libertad de expresión y el derecho de los periodistas a realizar investigaciones sobre figuras públicas son valores protegidos por el sistema interamericano de derechos humanos. Esas inconformidades deben ser tramitadas por las vías institucionales, de acuerdo con el derecho de rectificación o respuesta establecido en la ley costarricense y en el sistema interamericano (Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA para

la segunda vuelta en Costa Rica, abril 2022, párr.10)⁴.

La conversación pública electoral en redes sociales estuvo influenciada no solo por los altos niveles de desinformación sino también por la intervención directa de plataformas. En enero 2022, la empresa Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, anunció una serie de medidas adicionales para proteger la integridad de las elecciones en Costa Rica y brindar más transparencia a las personas, entre ellas la conformación de “un equipo especializado para detectar y eliminar riesgos en tiempo real, el programa de verificadores independientes de datos para combatir la desinformación y la colaboración con el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para brindar a las personas información confiable”.

Por otra parte, Facebook y el TSE acordaron eliminar publicaciones falsas sobre las elecciones que pusieran en riesgo el ejercicio del sufragio el mismo día de la elecciones. El acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones establecía que los encargados de solicitar la exclusión de contenidos serían los Magistrados del órgano electoral por medio de resoluciones fundamentadas⁵. Los únicos casos de contenidos removidos, por disposición del TSE, se refieren a propaganda prohibida durante el periodo de veda electoral.

Meta reveló, en el mes de abril, que eliminó una red de Comportamiento Inauténtico Coordinado, que tenía como intención manipu-

lar el debate público y lograr un objetivo estratégico a través de una gran cantidad de cuentas falsas y que amplificó contenido de páginas de políticos y negocios locales. “Usualmente publicaba sobre ambos bandos del espectro político, incluyendo apoyo a los candidatos políticos que competían entre sí. Algunas de estas cuentas tenían fotos de perfil, posiblemente generadas usando técnicas de inteligencia artificial como Redes Generativas Antagónicas (GAN por sus siglas en inglés) (Meta, Informe de Amenazas Adversarias, abril, 2022, p.15). Según la empresa, se eliminaron 233 cuentas de Facebook, 84 páginas, dos grupos y 27 cuentas de Instagram que operaban en Costa Rica y El Salvador.

En ese contexto, la MOE/OEA felicitó al órgano electoral por la diversidad de medidas para enfrentar la desinformación, entre ellas, la difusión de considerable información electoral a través de diversos canales.

El Observatorio de Discursos de Odio y Discriminación del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y la Organización de las Naciones Unidas, analizó las interacciones violentas que se dieron en redes sociales posterior a los debates presidenciales de los principales canales de televisión, durante la primera ronda presidencial. De 10.343 comentarios públicos analizados, el 62%, en el caso de Repretel, y el 53%, en el caso de Teletica, evidenciaron discursos de odio y/o interacciones violentas. El ataque violento contra periodistas y medios de comunicación registra el mayor porcentaje de interacciones.

En este tema queda pendiente una amplia discusión en el país sobre el papel de las plataformas de Internet en la remoción y moderación de contenidos y los eventuales riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión en línea.

Destaca, en este periodo, la promulgación de la Ley No. 1018, reforma al Código Electoral para brindar mayor transparencia y acceso a la información en el proceso electoral, del 26 de

4 Ver ambos informes en https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-001/22 y https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-003/22

5 <https://www.nacion.com/el-pais/politica/tse-y-facebook-acuerdan-eliminar-publicaciones/VXLETRC-FINFHFBNXBQRFSJ2TFY/story/> y <https://delfino.cr/2022/01/facebook-implementa-medidas-para-prevenir-desinformacion-durante-las-elecciones-en-costa-rica>

agosto de 2021, que exigió, para la inscripción en el Registro Electoral de las candidaturas a la presidencia de la República, la presentación del programa de gobierno del partido político correspondiente. “La información debe ser entregada con el contenido y en los formatos que se definan reglamentariamente. Asimismo, obligatoriamente deberá ser publicada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por los medios oficiales y en otros que estime convenientes, en cumplimiento del derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado”.

Tendencias legislativas

Durante el periodo de análisis, se presentaron a corriente legislativa varios proyectos de ley que revisten interés desde el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En el expediente No. 22.406 se retoma una iniciativa, de años atrás, para despenalizar los delitos contra el honor mediante la derogatoria de estas figuras, tanto en el Código Penal como en la Ley de Imprenta, y convertirlas en faltas civiles, reguladas en el Código respectivo. Según la exposición de motivos resulta “preocupante desde el ámbito del ejercicio del derecho a la libre expresión, constatar que las querellas por delitos contra el honor suelen ser utilizadas para intimidar y silenciar a las y los periodistas, a los medios de comunicación y la ciudadanía crítica. La amenaza constante de sufrir acusaciones penales puede provocar que quienes tienen el deber de informar al pueblo se autocensuren y omitan ventilar toda la verdad sobre asuntos de interés público”

La tendencia del sistema interamericano de derechos humanos, a partir de jurisprudencia de la Corte IDH, es que la sanción penal resulta desproporcionada en asuntos de interés público y que cualquier intento de despenalizar debe ser bien visto desde la protección al derecho a la libertad de expresión. No obstante, también es clara la jurisprudencia regional en que la san-

ción civil podría resultar igualmente desproporcionada en asuntos de interés público.

Otra de las propuestas legislativas, (expediente No. 22171) presentada durante el periodo, es el proyecto de ley para penalizar los crímenes de odio, el delito de discriminación racial y otras violaciones de derechos humanos. La propuesta busca sancionar la difusión de discriminación racial por cualquier medio, incluyendo Internet. La norma sancionaría “con prisión de seis meses a tres años, a quien difunda, distribuya o exhiba por cualquier medio y de cualquier forma, material con contenido de imagen, audio, video que promueva mitos, estereotipos, prejuicios o sesgos o que incite a otras personas a rechazar, desprestigiar, odiar, discriminar o a cometer actos de violencia o a otra acción ilegal similar contra una persona o grupos de personas sobre la base del odio racial, u organice, financie actividades que incite a otras personas a cometer dichos actos.”

Uno de los problemas de la regulación de los discursos de odio es, por un lado, la ausencia de una definición unívoca en el derecho internacional de los derechos humanos y, por otro, los tipos penales abiertos (como en este caso) por el riesgo de convertirse en una regulación y restricción desproporcionada de la libertad de expresión.

En el ámbito de la expresión comercial, una reforma integral a la Ley No. 5811, que se tramita en el expediente No. 22505 (Ley para la protección de la imagen y la dignidad de las mujeres en la publicidad comercial) pretende actualizar el marco normativo ya obsoleto (1975) para definir criterios y parámetros de calificación más precisos en la regulación de este tipo de contenidos. La reforma incorpora restricciones al material publicitario de carácter comercial que promueva o incite formas de discriminación y violencia simbólica, mediática, física, psicológica, sexual, de género, económica y patrimonial.

Una de las regulaciones más polémicas del texto, es la que considera como material publicitario las portadas de los periódicos de circulación nacional, lo que podría considerarse violatorio de la libertad editorial de los medios de comunicación: "...queda prohibida la presentación de la imagen de las mujeres y de las personas en general, como objetos sexuales en las portadas y contraportadas de los periódicos de circulación nacional para motivar sus ventas" (Artículo 7, párr. final).

La Asamblea Legislativa deja pendiente, lamentablemente, al concluir su periodo constitucional, la aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que significa un importante avance en el acceso a la información de interés público. El acuerdo garantiza la accesibilidad y el principio de máxima divulgación sobre asuntos ambientales: "Cada Parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad" (Expediente No. 21245, Artículo 5.1).

En temas de transparencia y publicidad en las donaciones privadas a partidos políticos, una iniciativa legislativa, recogida en el expediente No. 22599, introduce una reforma al artículo 123 del Código Electoral para que todos los partidos políticos, a escala cantonal, provincial y nacional, estén obligados a publicar mediante un medio digital de acceso público permanente la lista total de contribuyentes privados.

Las personas legisladoras cierran el periodo constitucional con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia (Expediente No. 20799) un instrumento normativo que salda la deuda del país en la regulación de este derecho. Se espera que este nuevo marco normativo supere las garantías ya establecidas por la vasta jurisprudencia constitucional, sin

embargo, se incluyen algunas restricciones al acceso a la información que podrían resultar contrarias al derecho (artículo 8).

Mediante el expediente No. 22032, se aprueba en segundo debate la Ley para prohibir la propaganda que denigre a la persona adulta mayor, que sanciona la publicidad y el contenido de archivos informativos descargables en Internet que menoscabe la dignidad, el honor o el derecho a la imagen de la persona mayor de edad. La nueva legislación introduce modificaciones a la Ley No. 5811, que regula la publicidad que utiliza la imagen de la mujer, mientras en corriente legislativa espera una iniciativa de reforma integral a esta Ley. Una actividad legislativa desarticulada y que propone parches aislados a desafíos comunes.

La jurisprudencia constitucional y electoral

Durante los años 2020-2021, la Sala Constitucional continuó con el desarrollo jurisprudencial garantista del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

En uno de los votos relevantes del periodo, declaró con lugar un recurso de amparo contra la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), por exhortar a los funcionarios a no brindar información a la prensa. En la resolución No. 16167-2020, el Tribunal estima que la actuación de la funcionaria constituye una afectación a los derechos constitucionales a la libertad de pensamiento y expresión, de prensa y a la igualdad, todo esto en relación con los principios constitucionales de rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública. Se trata, según la Sala, de una especie de censura velada, dado que el resultado es que los medios de comunicación afectados (*Diario Extra* y *CRHoy*) no tuviesen acceso a la información pública.

Mediante resolución No.21939-2020, el órgano jurisdiccional declara con lugar un

recurso de hábeas corpus interpuesto por una periodista por su aprehensión arbitraria e injustificada y la restricción desproporcionada al ejercicio de su libertad de prensa, mientras filmaba la actuación de la policía en una manifestación, en vía pública, ocurrida en Ochomogo, en octubre de 2020.

El Tribunal constitucional sostiene que la protección de la libertad de prensa se garantiza a aquella persona que ejerza una actividad periodística, y que tal protección va dirigida al ejercicio del periodismo en libertad. En razones adicionales, la Magistrada Hernández sostiene que “en una democracia constitucional como la nuestra, la ciudadanía y, en especial, la prensa, tiene derecho a cuestionar, filmar y registrar los actos de la policía en vía pública (como parte del accountability), sin que eso pueda ser considerado una amenaza o agresión a su actuación, menos aún, ser capaces de justificar represalias o arbitrariedades contra las libertades fundamentales de los ciudadanos”.

En otra resolución de 2020, el Tribunal Constitucional consideró que la resolución de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, (Prodhab) que ordenó al *Diario Extra* eliminar la fotografía de un denunciante, de sus plataformas digitales, es lesiva a la libertad de información. Según la Sala, el ejercicio de las competencias de la Prodhab, para fines de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, no puede ser utilizada como un censor del ejercicio legítimo de la libertad de prensa, porque ello sería una censura indirecta, en control del Estado (Resolución No. 10961-2020).

Otras resoluciones relevantes entre ellas: No. 2207-2021, acceso a información sobre acuerdo con FMI y Ley de Empleo Público; No. 27055-2021, no cabe el derecho de rectificación o respuesta sobre opiniones; No. 23743-2021, obligación de Sugef de entregar información estadística sobre denuncias y quejas de clientes del Banco Nacional; No. 96660-2021 se lesiona

el derecho a la información el cobrar al administrado por información disponible. Otros votos de interés: 18615-2021, 13508-2021, 5806-2021 y 16680-2020, entre otros.

Por su parte, en este periodo electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones conoció de asuntos relacionados con la participación en los debates de las candidaturas presidenciales, sobre veda electoral, el bloqueo a usuarios de cuentas de partidos políticos en Internet, entre otros asuntos.

En la resolución No. 1633-E1-2022, el órgano electoral declara con lugar un recurso de amparo electoral por el bloqueo a un usuario de la red social Facebook, por parte de un partido político. En el voto, el TSE sostiene que cuando el bloqueo en redes “se da desde la cuenta de la agrupación política... se genera una acción desproporcionada... que restringe a un votante el acceso a parte de la información con la que podría formarse su decisión electoral.” El órgano electoral ha sostenido la posición de que esa misma exigencia no se puede hacer en los perfiles personales de las personas candidatas a puestos de elección popular. (sentencia n.º 3252-E1-2018), criterio que contrasta con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión que tutela de manera especial la información de la ciudadanía en los contextos electorales.

Cuando se trata de un perfil de una agrupación política, la “función de relevante de interés público” (artículo 49 CE) que cumplen los partidos hace que aplique, *mutatis mutandis*, la doctrina desarrollada por la Sala Constitucional en punto a la imposibilidad que tienen los administradores de cuentas institucionales de bloquear, sin fundamento, a los usuarios.

Es importante destacar el criterio minoritario, reiterado en esta sentencia, de la Magistrada Zetty Bou en el sentido que también procedería acoger un amparo, cuando una per-

sona candidata utilice su perfil personal para dar información relevante para su campaña o de su partido y bloquee a un usuario.

El TSE reiteró, durante el reciente proceso electoral, el amplio margen de acción que, para difundir información y realizar cobertura de eventos políticos, tienen los medios de prensa. En el caso de la difusión de debates durante el periodo de veda propagandística, el órgano electoral sostuvo que la organización de debates forma parte del ejercicio periodístico amparado en la libertad de prensa, lo cual no solo descarta el carácter “propagandístico” de la actividad, sino que justifica el por qué esos interlocutores tienen margen suficiente para decidir a quiénes invitan a sus actividades (Resolución No. 0777-E1-2022).

Durante el periodo, el órgano electoral conoció también de recursos de amparo electoral por la exclusión de candidaturas en debates organizados por medios de comunicación privados. El TSE reiteró el criterio de que en la organización de debates político-electorales por parte de medios de comunicación privados no existe norma que los obligue a invitar a todas las personas que aspiran a puestos de elección popular; “la única intervención legítima de la Autoridad Electoral en los debates, cuando sean organizados por medios de comunicación privados, podría darse en presencia de los supuestos de excepción desarrollados o que, en los términos de la doctrina sentada en la resolución N° 4099-E8-2009, generen exclusiones –de uno o varios de los contendientes– por criterios de selección no objetivos o arbitrarios” (Resolución No. 0835-E1-2020).

En Resolución No. 4137-E3-2020, el Tribunal Supremo de Elecciones conoce de un recurso de apelación electoral de un periodista a quien la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos le impuso una multa por infracción a la veda electoral, conforme con el artículo 288 inciso c) del Código Electoral. El comunicador alegó en su

recurso que la imposición de la multa violaba su libertad de prensa. Al valorar que los contenidos transmitidos en el programa televisivo del recurrente no eran contenidos periodísticos sino propaganda electoral, el órgano electoral confirmó la sanción. Según el TSE:

El elemento esencial de la propaganda es la intencionalidad de la información con la que se pretende influir en la opinión de los receptores para que adopten un determinado comportamiento electoral. En este asunto, revisada la prueba se concluye que las pautas no constituyen entrevistas de contenido como pretende hacerlo ver el impugnante: no solamente no poseen ese formato en el que participan dos personas y se formulan preguntas o afirmaciones para que una de ellas conteste lo requerido, sino que, únicamente, se trató de espacios en los que diversas personas candidatas del PRSC expusieron sus ideas y proyectos con la intención de influir en la voluntad del electorado y convencerlo de votar por esa agrupación política.

El III Informe sobre el estado de la libertad de expresión en Costa Rica

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) presentan un nuevo informe sobre el estado de la libertad de expresión en Costa Rica. Esta tercera edición se enmarca en los viejos y nuevos desafíos que presenta la libertad de expresión en las sociedades democráticas: la desinformación y las narrativas violentas en el entorno digital, las viejas y nuevas estructuras de concentración de poder en los medios de comunicación, la seguridad de los periodistas, la calidad de la información y las garantías para el acceso a la información sobre asuntos públicos.

Este documento es solo un ángulo de referencia sobre algunos temas esenciales de la

dimensión social de libertad de expresión en nuestro país. Quedan muchos asuntos pendientes, en especial aquellos que condicionan hoy este derecho en el entorno digital.

En el primer capítulo se presenta una caracterización de los principales grupos de la comunicación en Costa Rica, un acercamiento a las distintas prácticas de concentración que ejercen y los hitos y movimientos más relevantes de los últimos años. En una democracia, el sistema de propiedad de los medios de comunicación es muy relevante, nos ayuda a determinar las voces representadas y las voces ausentes, así como los desafíos en pluralismo informativo que tiene el país.

El fenómeno de la desinformación es particularmente importante en los procesos democráticos contemporáneos. El segundo capítulo se dedica a un análisis de la difusión de contenidos desinformativos en la campaña política 2022, en tres grandes macrotemas: pandemia, elecciones y candidatos.

El Informe presenta, en el tercer capítulo, una revisión a las iniciativas presentadas en la Asamblea Legislativa para regular el derecho de acceso a la información pública y los alcances de estas propuestas, en especial la iniciativa aprobada en segundo debate, bajo el expediente No. 20799, Ley de Acceso a la Información y Transparencia.

La inseguridad y la precarización del trabajo de las personas que ejercen el periodismo son parte las temáticas abordadas en cuarto capítulo de este III Informe. El estudio se concentra en variables como la percepción sobre amenazas, hostigamiento y la vigilancia, junto a otras formas de intimidación y de violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa, los mecanismos de seguridad y las condiciones laborales.

El quinto capítulo hace un balance crítico entre las formas de violencia política, mediática y digital que marcan las experiencias de las mujeres en política y las estrategias para superar dichas violencias. El texto describe los usos políticos de las redes sociales que hacen las mujeres en ejercicio político para la construcción de estrategias de negociación, confrontación y superación de la violencia política.

Finalmente, el sexto capítulo nos presenta un interesante análisis a profundidad de la calidad de las noticias en varios medios de comunicación, desde una perspectiva teórica, que propone que la calidad periodística es un derecho de las audiencias.

Esperamos que la información que recoge este III Informe sirva de insumo para el debate académico, político y social de temas esenciales para fortalecer el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en Costa Rica. ■